

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO INTERLOCUTORIO: 1060
RADICACIÓN: 11001-33-35-027-2022-00122-00
MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO SINGULAR
EJECUTANTE: DAGOBERTO RODRIGUEZ CABREJO
EJECUTADA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
ASUNTO: Rechazo demanda por caducidad

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

1. ASUNTO

Se decide sobre el pedimento de librar mandamiento ejecutivo en los términos solicitados en la demanda de la referencia.

2. ANTECEDENTES

El señor Dagoberto Rodríguez Cabrejo, por conducto de apoderado especial, formuló las siguientes pretensiones:

“Se libre mandamiento ejecutivo de pago, a favor del señor Dagoberto Rodríguez Cabrejo y en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (de ahora en adelante UGPP), Representada Legalmente por la Doctora GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO, y/o quien haga sus veces o a quien ella designe, por los siguientes conceptos y sumas de dinero relacionados a continuación:

1. Por la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$1.870.083,99, MCTE), por concepto de la diferencia de las sumas descontadas por aportes y ordenados dentro del proceso de la referencia, mediante sentencia del 27 de junio de 2014 proferida por el Juzgado Veintisiete Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, confirmando y modificando por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “D”, en la que se dispone que: (...) igualmente, se harán los descuentos, que por aportes se deban realizar (...) mediante fallo del 5 de marzo de 2015.

2. Se realice una liquidación sobre la proporción que corresponde a la pensión de CINCO por ciento (5%) de aportes que estimaba la normativa vigente (ley 4º de 1966, ley 33 de 1985), del tiempo laborado entre el 20 de enero de 1969 al 31 de marzo de 1994.

3. Se realice una liquidación sobre la proporción que corresponde a la pensión del Once punto cinco por ciento (11.5%) de aportes en los términos de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, del tiempo laborado entre el 1 de abril de 1994 y 31 de diciembre de 1994.

4. Se realice una liquidación sobre la proporción que corresponde a la pensión del doce puntos cinco por ciento (12.5%) de aportes en los términos de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, del tiempo laborado entre el 1 de enero de 1995 y 31 de diciembre de 1995.

5. Se realice una liquidación sobre la proporción que corresponde a la pensión del trece punto cinco por ciento (13.5%) de aportes en los términos de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, del tiempo laborado entre el 1 de enero de 1996 y 31 de diciembre de 2003.

6. Se realice una liquidación sobre la proporción que corresponde a la pensión del trece punto cinco por ciento (14.5%) de aportes en los términos de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, del tiempo laborado entre el 1 enero de 2004 y 31 de diciembre de 2004.

7. Se realice una liquidación sobre la proporción que corresponde a la pensión del trece punto cinco por ciento (15%) de aportes en los términos de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, del tiempo laborado entre el 1 enero de 2005 y 31 de diciembre de 2005.

8. Se realice una liquidación sobre la proporción que corresponde a la pensión del trece punto cinco por ciento (16%) de aportes en los términos de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, del tiempo laborado entre el 1 enero de 2006 y 30 de agosto de 2011.

9. Por los intereses moratorios de los dineros que por concepto de la diferencia de las sumas descontadas arbitrariamente por la UGPP y ordenados dentro del proceso de la referencia, mediante sentencia del 05 de marzo de 2015 Causados desde el día siguiente del pago del retroactivo, hasta la fecha en que se cancele la suma, equívocamente descontada.

10. Se condene en costas a la parte demandada (...)."

Allegó como base del recaudo compulsivo copia de las sentencias de primer grado proferida por este juzgado el 27 de junio de 2014 y de segunda instancia dictada el 5 de marzo de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-31-027-2013-00213-00, con constancia de ejecutoria del 23 de junio de 2015, en virtud de las cuales se condenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) a: (i) Re-liquidar la pensión mensual de vejez del señor Dagoberto Rodríguez Cabrejo, incluyendo todos los factores salariales devengados en el último año de servicios en el Departamento Administrativo de Seguridad; y (ii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

También aportó copia de la Resolución No. RDP 035427 del 22 de septiembre de 2016, por la cual la UGPP reliquidó la pensión de vejez del demandante y le descontó \$4'972.312 por concepto de aportes para pensión sobre los factores de salario no efectuados.

3. CONSIDERACIONES

El artículo 104, numeral 6, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) prevé que esta jurisdicción está instituida para conocer de los procesos ejecutivos derivados de las condenas impuestas y conciliaciones aprobadas por la jurisdicción; al paso que el artículo 297, numerales 1 y 2 *ibídem*, dispone que constituyen título ejecutivo las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias y las decisiones en firme dictadas en desarrollo de mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible; mientras que el artículo 215, inciso 2 *ejusdem* consagra que cuando se trate de un título ejecutivo, el documento que lo contenga deberá cumplir los requisitos exigidos en la ley.

Por su parte, el artículo 422 del Código General del Proceso (en adelante CGP), aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, dispone que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, y los demás documentos que señale la ley; al paso que el artículo 114, numeral 2 *ibídem* consagra que las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de ejecutoria.

A su turno, el artículo 299 del CPACA, modificado por el artículo 81 de la ley 2080 de 2021, prevé que presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquél considere legal.

Nótese, que tales preceptos consagran que la obligación objeto de recaudo por la vía compulsiva debe ser **clara**, vale decir, fácilmente inteligible y entendida en un solo sentido y, si es una suma de dinero, debe ser determinada o determinable mediante una simple operación aritmética, de tal forma que haya certeza sobre su monto, pues de no ser así no reuniría esta condición esencial del título ejecutivo y, por tal motivo, no sería susceptible de cobro forzado.

También debe ser **expresa**, esto es, que debe constar en forma nítida el crédito del ejecutante y la deuda del ejecutado, o aparezca manifiesta de la redacción del título, sin que para ello haya que acudir a elucubraciones o suposiciones, por lo que faltará este requisito cuando se pretenda deducir la obligación por razonamientos lógico-jurídicos o sea considerada una consecuencia implícita.

Por último, debe ser **exigible**, es decir, que puede demandarse su cumplimiento por no estar pendiente de plazo o condición, o sea, vencido el primero o acaecida la segunda o, si se trata de una obligación pura y simple (no está sometida a plazo o condición), su exigibilidad opera previo requerimiento al deudor, el cual se suple con la notificación del mandamiento ejecutivo (art. 423 CGP).

Ahora bien, como el título ejecutivo lo constituye una sentencia dictada bajo las reglas del CPACA (Ley 1437 de 2011), en cuya parte resolutive se dispuso que debía cumplirse en los términos de los artículos 192 y 195, es claro que en lo tocante al plazo otorgado para que las condenas sean susceptibles de ejecución, se regirán por dichos preceptos, y en cuanto a la caducidad deberá atemperarse al artículo 164, literal k, *ibídem*.

En efecto, el artículo 192 del CPACA. consagra que las condenas impuestas en las sentencias serán ejecutables diez (10) meses después de su ejecutoria y las cantidades liquidas reconocidas devengarán intereses comerciales y moratorios, y cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga una condena, sin que el beneficiario haya acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma.

A su turno, artículo 164, literal k, del CPACA prevé que la acción ejecutiva derivada de providencias proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ella contenida.

Sobre la naturaleza jurídica de los términos procesales, el Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia, ha considerado que las normas que los consagran son de orden público y comportan características de ser inoponibles, preclusivos, de cumplimiento inmediato, obligatorios y perentorios, motivo por el cual las excepciones que autorizan su interrupción o suspensión deben ser de entero orden legislativo, no pudiendo el interesado o el juez acudir a interpretaciones que conduzcan a incumplir el mandato normativo que obliga a su computo ininterrumpido, por lo que las partes quedan obligadas a actuar dentro de los plazos previstos en las codificaciones procesales de cada especialidad.

En sentencia del 30 de noviembre de 2021, la Sala Quince Especial de Decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado¹ discurrió sobre la obligatoriedad de los plazos previstos para ejercer el derecho de acción, y concluyó lo siguiente:

“33. Atendiendo a que los términos procesales son indisponibles tanto para las partes como para el juez, tienen carácter preclusivo y perentorio y su obligatorio cumplimiento se ha considerado como parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso, la Corte Constitucional² para garantizar el principio de seguridad jurídica, se ha pronunciado en los siguientes términos:

¹ Sentencia del 30 de noviembre de 2021; Consejo de Estado, M.P. Hernando Sánchez Sánchez, Sala Quince Especial de Decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Radicación número: 11001-03-15-000-2019-04135-00(REV)

² Corte Constitucional, sentencia T-1165 de 2003. En el mismo sentido, Corte Constitucional, sentencia C-012 de 2002: “*Tanto las partes procesales como las autoridades judiciales están obligadas a cumplir en forma exacta y diligente los plazos que la ley consagra para la ejecución de las distintas actuaciones y diligencias en las diversas fases del proceso. Así pues, las partes tienen la carga de presentar la demanda, pedir pruebas, controvertir las allegadas al proceso, interponer y sustentar los recursos y, en fin, participar de cualquier otra forma en el proceso dentro de las etapas y términos establecidos en la ley (...)*”.

[...] En desarrollo del principio de igualdad procesal surgió la imperiosa necesidad de establecer términos judiciales que, de manera imperativa, exijan la realización de los actos procesales en un determinado momento, so pena de asumir las consecuencias adversas que al respecto establece el ordenamiento procesal. En efecto, dejar al libre arbitrio de los sujetos procesales el señalamiento de las distintas oportunidades y etapas de un proceso, afectaría gravemente el debido proceso, la igualdad de las partes, la economía procesal y, en especial, tornaría de difícil realización el principio de contradicción. Nótese como una atribución en dicho sentido, impediría ofrecerles a los sujetos procesales los mismos derechos y, a su vez, exigirles iguales obligaciones.

Por otra parte, la importancia de limitar en el tiempo la realización de los actos procesales que le interesan a las partes o le corresponden al juez, tiene como propósito velar por la salvaguarda del principio de la seguridad jurídica. A este respecto, justo es decir que el señalamiento de un término judicial indudablemente otorga certeza sobre el momento en el cual ocurrirá la solución de un asunto sometido a consideración de la Administración de justicia y, por ello, permite consolidar situaciones jurídicas en beneficio de las personas que acuden a la jurisdicción.

A partir de lo expuesto, la doctrina reconoce a los términos judiciales como los espacios de tiempo señalados por los Códigos de Procedimiento o sujeto a la decisión del juez, cuyo fin consiste en hacer realidad el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, de permitir la realización de los distintos actos procesales en interés del orden jurídico y de los sujetos que intervienen en un trámite judicial [...].

34. Por último, tratándose de los plazos indicados en las codificaciones procesales para ejercer el derecho de acción, debe tenerse en cuenta que estos tienen, además, la función de salvaguardar la seguridad jurídica y el interés general, razón por la que acaecen de forma automática e independiente de la voluntad de las partes o de cualquier causa externa que pudiera afectarlos. Así, si bien todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a la administración de justicia, esto debe ocurrir dentro de los plazos previstos de manera general e impersonal para “[...] presentar las demandas y demás actuaciones dentro de la oportunidad legal, es decir, acatando los términos fijados por el legislador [...]”.

En la sentencia del 26 de agosto de 2021, la Sección Cuarta del Consejo de Estado³, realizó las siguientes consideraciones sobre la caducidad como presupuesto procesal de la acción:

“Ahora, es cierto que la caducidad u oportunidad para demandar (que es un presupuesto procesal de la acción) debe examinarse por el juez administrativo al momento de decidir sobre la admisibilidad de la demanda. De advertirse que la demanda se presentó por fuera del término legal, es obvio que sobrevenga el rechazo de plano (artículo 169-1), pues sería contrario a los principios de seguridad jurídica y de economía procesal que el juez tramite y decida de fondo la demanda que no se formuló oportunamente.

Con todo, en cualquier momento, y con mayor razón en la sentencia, el juez tiene competencia para revisar la oportunidad de la acción, pues los plazos para acudir ante el juez (que son plazos preclusivos) están previstos en normas procesales que son de orden público, cuya característica principal es que son obligatorias y de inmediato cumplimiento.

Justamente la reciente reforma al CPACA pretendió asegurar que la excepción de caducidad se resuelva oportunamente y, para tal efecto, facultó al juez administrativo para que, sin agotar todas las etapas del proceso, la decida por sentencia anticipada”.

En el presente caso, se observa que la sentencia objeto de ejecución fue proferida por este juzgado el 27 de junio de 2014, y fue confirmada parcialmente el 5 de marzo de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, quedando ejecutoriada el 23 de junio de 2015, por lo que a partir del día siguiente a esa fecha se inicia el cómputo de los 10 meses previstos en el artículo 192 del CPACA para que la obligación fuera exigible, los cuales vencieron el 24 de abril de 2016, y desde el día siguiente a esta data empezaron a correr los 5 años de que trata el artículo 164, literal k, del CPACA para iniciar la acción ejecutiva, so pena de operar la caducidad, plazo que en principio fenecería el 25 de abril de 2021, pero como en desarrollo de la declaratoria de emergencia sanitaria causada por la pandemia del virus covid-19 se suspendieron los términos de caducidad y

³ Sentencia del 26 de agosto de 2021; Consejo de Estado, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, Sección Cuarta; Radicación número: 11001-03-27-000-2020-00019-00(25366).

prescripción entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020 (3 meses y 15 días), dicho lapso se prorrogó hasta el 10 de agosto de 2021, y dado que la demanda ejecutiva se presentó el 21 de abril de 2022, es evidente que operó la caducidad de la acción.

Ahora, en gracia de discusión, podría pensarse que los cinco (5) años de caducidad podrían contarse desde el día siguiente a la notificación de la Resolución No. RDP 035427 expedida el 22 de septiembre de 2016 por la Subdirectora de determinación de Derechos Pensionales de la UGPP, que en su artículo octavo ordenó descontar de las mesadas atrasadas a que tenía derecho el señor Dagoberto Rodríguez Cabrejo la suma de \$4'972.312 por concepto de aportes para pensión de los factores de salario no efectuados, deducción que la parte actora considera excesiva y que por ese motivo incoó la acción ejecutiva para que se le restituya la diferencia, pues se podría alegar que a partir de esa fecha se enteró de la afectación de su derecho al pago completo del reajuste pensional ordenado en la sentencia.

No obstante, este juzgado estima que no sería plausible tal inferencia si se tiene en cuenta que tal circunstancia no está prevista en la ley como causa de interrupción y/o suspensión del término de caducidad de la acción ejecutiva, pues como se explicó en la jurisprudencia citada en líneas atrás, las excepciones al conteo ininterrumpido de dicho plazo extintivo deben estar expresamente previstas en la ley, y entre ellas no figura la expedición del acto administrativo de cumplimiento de la sentencia, unido a que la Resolución No. RDP 035427 del 22 de septiembre de 2016 no es el título ejecutivo invocado como base del pretendido recaudo, sino la sentencia a la que se hizo alusión y, por ende, el plazo quinquenal extintivo se cuenta desde el día siguiente a su exigibilidad, es decir, una vez vencidos los diez (10) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de dicha providencia.

En ese orden, al tenor del artículo 169, numeral 1, del CPACA, deberá rechazarse la demanda ejecutiva por haber operado la caducidad de la acción y ordenarse la devolución de los anexos a la parte ejecutante.

4. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Bogotá, dispone:

PRIMERO: RECHAZAR la demanda ejecutiva presentada por el señor DAGOBERTO RODRÍGUEZ CABREJO contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, por haber operado la caducidad de la acción.

SEGUNDO: DEVOLVER la demanda ejecutiva y sus anexos a la parte ejecutante.

TERCERO: RECONOCER al Dr. JAIRO IVAN LIZARAZO ÁVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.456.810 expedida en Bogotá y titular de la tarjeta profesional de abogado No. 41146 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte ejecutante en los términos y para los fines conferidos en el poder visible en el archivo “02DemandaEjecutivaAnexos” del expediente digital.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ

Juez

JVG

Firmado Por:

Humberto Lopez Narvaez
Juez
Juzgado Administrativo
027
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6a4f2b47c6874b1a7f142b026992cd9d831a6c430341df0d9ffeab8538c30978**

Documento generado en 24/11/2022 03:26:22 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>